

El impacto de la ley 3 de 3 contra la violencia de género, de cara a los comicios 2023-2024

Introducción

En las presentes líneas se pretende abordar el impacto de la reciente reforma constitucional conocida como “3 de 3”, por medio de la cual se establece en la fracción VII del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una nueva causal de suspensión de los derechos o prerrogativas de la ciudadanía, , concerniente a contar con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; así como por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, motivos por los cuales las personas bajo estos supuestos, no podrán ser registradas como candidatas para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Así, a lo largo del texto se pretende analizar la reforma en mención, así como los impactos que se esperan de cara a los próximos comicios a nivel federal y local; sus posibles beneficios e implicaciones en lo político; el cómo se verá reflejada en el ejercicio de derechos; y, las dificultades que se avizoran para su implementación desde los órganos electorales en los diversos contextos que conviven en nuestro país y al interior de cada estado.

Por lo que se espera que las reflexiones que se abordan a lo largo de estas páginas sirvan para tener un mayor conocimiento y comprensión de la reforma constitucional y sus efectos futuros.

Breves antecedentes de los derechos políticos y electorales de las mujeres

Aún y cuando las mujeres representan un factor indispensable en el desarrollo político, económico y social, la lucha por el reconocimiento y posterior respeto de sus derechos ha

sido constante, ello ya que históricamente el ejercicio pleno de la ciudadanía ha estado estrechamente ligado a las relaciones de poder o de dominación de los hombres sobre las mujeres y la negación del ejercicio de la misma. Así, el patriarcado ha tenido un impacto nocivo para la construcción de la ciudadanía plena de las mujeres.

Durante siglos se le negó a la mujer el ejercicio de derechos como la propiedad, la libertad de organización, la nacionalidad y el voto, por lo que el acceso a estos derechos ha demorado notablemente con relación a los hombres, lo cual ha generado que a la fecha los índices relacionados con la violencia, educación, empleo, mortalidad, pobreza o igualdad revelen que las mujeres son mayormente perjudicadas.

En cuanto al ejercicio de los derechos políticos y electorales, no fue hasta 1922 que la Constitución del estado de Yucatán reconoció el derecho de la mujer a votar en las elecciones municipales, un año después se hizo lo mismo en la Constitución de San Luis Potosí, y en 1925 en la del estado de Chiapas. En tanto, a nivel nacional, en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Federal para reconocer el derecho al voto de las mujeres, y es de resaltar que aún y cuando fue aprobada por el Congreso de la Unión, la declaratoria para su vigencia no se llevó a cabo. Fue hasta 1947 que el presidente Miguel Alemán promulgó, a través de una reforma constitucional al artículo 115, el derecho de las mujeres a votar en elecciones municipales; y el 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruíz Cortínez, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se otorgó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en el ámbito federal, a través de una reforma al artículo 34 de la Constitución, así, emitieron por primera vez su voto para la elección de diputaciones federales el 03 de julio de 1955.

Por otra parte, el 27 de diciembre de 1974, el H. Congreso de la Unión expidió dos decretos relativos a la igualdad jurídica de la mujer que reformaron y adicionaron tres códigos, cuatro leyes y la propia Constitución Federal, decretos que entraron en vigor el último día del año. En dicha lucha por el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en 2006 publicaba la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres y en 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia, esta última, la cual establece

por primera vez, la coordinación institucional para prevenir, proteger y erradicar la violencia, además de asignarle un presupuesto para asegurar su implementación.

Años más tarde, esto es, el 06 de junio de 2019 se publicó el decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Federal, mediante el cual se publicaron las reformas denominadas “Paridad en todo”, toda vez que se estableció el derecho de la ciudadanía a poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, el principio de paridad en elecciones de población indígena, en nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del poder ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas, en la integración de organismos autónomos, en el Congreso de la Unión, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ayuntamientos.

Por su parte, el 18 de marzo de 2020 se emitió el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones en materia de violencia política de género, entre ellas de, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales;¹ mismas que vinieron a regular la violencia política de género, tipificándola por vez primera como un delito.

Luego, el 28 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Acuerdo INE/CG517/2020, mediante el cual se aprueban los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Lineamientos en los cuales se establece el “3 de 3 contra la violencia”, previendo que las y los sujetos obligados por los mismos, deberán solicitar a las y los aspirantes a una candidatura, firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentren bajo tres supuestos: I. No haber sido persona condenada, o

¹ Asimismo, se reformaron y/o adicionaron: la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias.

Finalmente, el 29 de mayo de 2023 se publicó el decreto mediante el cual se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previendo otra causal de suspensión de los derechos o prerrogativas de la ciudadanía, misma que será la materia de estudio del presente trabajo.

Reforma constitucional en materia de suspensión de los derechos o prerrogativas de la ciudadanía.

El Congreso de la Unión aprobó la conocida reforma “3 de 3”, misma que fue publicada el 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se adiciona la fracción VII al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

“VII. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación”.

En tanto, en el artículo Segundo Transitorio del decreto, se previó que:

*“**SEGUNDO.** Dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán ajustar sus Constituciones y demás legislación que sea necesaria, a fin de dar cumplimiento al presente Decreto”.*

De lo anterior tenemos que, la persona -hombre y mujer- no podrá ser registrada como candidata para algún cargo de elección popular, ni ser servidora pública, toda vez que sus derechos y prerrogativas como ciudadana se suspenderán, en los siguientes supuestos:

- a) Por sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal;
- b) Por sentencia firme contra la libertad y seguridad sexuales y/o el normal desarrollo psicosexual;
- c) Por sentencia firme por violencia familiar, por violencia familiar equiparada o doméstica y/o por violación a la intimidad sexual;
- d) Por sentencia firme por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
- e) Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Ahora bien, la norma constitucional dispone que será en la ley reglamentaria en la cual se establecerán los casos en que se pierden dichos derechos o prerrogativas y los casos en que se suspenden, así como el cómo se podrá hacer la rehabilitación. Además prevé que el Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales contarán con 180 días naturales -posteriores a la entrada en vigor del decreto-, para ajustar sus constituciones y demás legislación necesaria, es decir, el congreso tiene hasta el 25 de noviembre del presente año para ello, cuestión que resulta por demás interesante, toda vez que el proceso electoral federal inicia el 01 de septiembre y acorde al artículo 105 de la propia Carta Magna, las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Resulta importante señalar que, en relación al tema relativo a ser “*declarada como persona deudora alimentaria morosa*”, el 26 de mayo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la **Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes**, en relación al **Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias**, de las cuales, para efectos de este trabajo, son de resaltar:

***Artículo 120.** Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, corresponde a la federación, a través del **Sistema Nacional DIF**:*

...

VI. Tendrá a su cargo el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en los términos que establece esta Ley, y

***Artículo 135 Bis.** Se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias cuyo objeto es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.*

Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para que con ella integre al Registro Nacional de Obligaciones.

La calidad de deudor moroso se difundirá en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual, será público con base en lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas y de la Ciudad de México tendrán acceso total a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones.

Los datos recabados en este registro podrán ser utilizados para los fines estadísticos o de análisis que se consideren necesarios.

La actualización del registro deberá realizarse de forma mensual.

Artículo 135 Quinquies. *El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción, a petición de la parte interesada. Para efecto de lo anterior, se dispondrá de un sitio web en el cual **se genere automáticamente el certificado de forma gratuita**, mismo que contendrá como mínimo la siguiente información:*

I. *Nombre o nombres, apellidos y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario;*

II. *Órgano jurisdiccional que ordenó el registro, cuantía de la pensión y estado de cumplimiento.*

Artículo 135 Sexties. *Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, dispondrán lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Entre los trámites y procedimientos que podrán requerir la expedición de ese certificado, se encuentran los siguientes:*

I. *Obtención de licencias y permisos para conducir;*

II. *Obtención de pasaporte o documento de identidad y viaje;*

III. *Para participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular;*

IV. *Para participar como aspirante a cargos de jueces, magistrados en el ámbito local o federal;*

V. *Los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales, y*

VI. *En las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro, mencionando la situación que guardan respecto de las obligaciones que tiene.*

**Lo resaltado es propio.*

Respecto a los términos previstos para su implementación, en los artículos **Transitorios** se prevé:

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Sistema Nacional DIF contará con un plazo de trescientos días hábiles para la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Tercero. Los Congresos Locales y los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, contarán con un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles a partir del inicio de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para armonizar el marco normativo correspondiente, en armonía con los lineamientos que establezca el Sistema Nacional DIF, conforme a lo establecido por el presente Decreto.

Cuarto. La autoridad encargada del Registro Nacional, en el término de noventa días naturales, emitirá la normativa a través de la cual se establezca el formato, tiempo, modo y lugar para que las autoridades locales obligadas en el presente decreto cumplan con las obligaciones establecidas a través del presente Decreto.

**El resaltado es propio.*

Conforme a lo anterior tenemos que, en miras a dar cumplimiento a la norma constitucional, el poder legislativo federal previó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en la norma general -Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes-, mismo que estará a cargo del Sistema Nacional DIF, así como, prevé las instancias obligadas a suministrar la información; este registro será público y expedirá de forma gratuita un certificado de no inscripción, mismo que será requerido para participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular.

El porqué de la reforma constitucional

Esta reforma se da toda vez que la violencia hacia las mujeres y en el interior de las familias se presenta día a día en nuestro país,² lo cual provoca daños a la vida, a la salud física y

² En 2021 en México, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. De las anteriores, la violencia psicológica es la que más prevalece con un 51.6%, seguida de la violencia sexual con un 49.7%, violencia física 34.7% y violencia económica, patrimonial y/o discriminación con un 27.4%. Es de resaltar que conforme al 2016 la violencia se ha incrementado en 4 puntos porcentuales en 2021 (INEGI 2021).

mental, influye en la libertad de las mujeres, en su seguridad, así como en su desarrollo sexual y psicosexual; en tanto, la obligación alimentaria implica la preservación de derechos humanos como el derecho a la vida y al sano desarrollo de las personas, y en particular de las niñas, niños y adolescentes, así que, mediante la reforma constitucional se pretende prevenir y erradicar este tipo de conductas en particular en personas servidoras públicas o quienes pretendan serlo, al impedirles acceder a un cargo público por estar en los supuestos antes planteados; busca construir una sociedad más justa, equitativa y con menor discriminación.

Por lo cual, mediante esta reforma se pretende reducir las brechas de género y priorizar los derechos de la niñez y adolescencia, buscando dar cumplimiento a lo previsto en la normatividad nacional e internacional, como lo es el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados parte a tomar las medidas incluso legislativas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.³

Beneficios e implicaciones políticas de la reforma constitucional

La nueva causal de suspensión de derechos o prerrogativas es un gran avance para la búsqueda de la igualdad sustantiva de los derechos políticos de las mujeres, ello toda vez que son éstas las que se encuentran más propensas a sufrir todo tipo de violencia, y en particular violencia política cuando pretenden postularse a algún cargo de elección popular.

Además, no es posible que ocupen cargos públicos, personas que transgreden los derechos de otras; servidoras y servidores que sean perpetradores de actos de violencia de toda índole, ni quienes incumplan con su obligación básica de pagar sus obligaciones alimentarias, es decir, deudas alimentarias morosas.

³ Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

Así, esta reforma vino a plasmar y dar fuerza normativa a lo previsto por el Consejo General del INE, en el Acuerdo INE/CG517/2020 por medio del cual aprobó los *Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género*, en los cuales se estableció la obligación de quienes pretendían ocupar un cargo de elección popular, de presentar una declaración bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenada o sancionada en sentencia firme por: violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género; delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; ser deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, por lo que ahora al insertarse en la norma máxima de nuestro país ya no estará sujeto -en vías de retroceso- a las modificaciones propias de cada proceso electoral, ya sea por la autoridad administrativa, el legislador secundario o por los propios tribunales, ya que ahora es una causa constitucional de suspensión de derechos.

Entre los beneficios que conlleva esta norma están el que, las personas candidatas y aspirantes, deberán abstenerse de realizar actos de violencia, ya que de resultar sentenciadas sus derechos se verán suspendidos, por lo que al inhibir estas conductas se estima que las mujeres candidatas tendrán una menor dificultad para participar en el proceso electoral, contando con una mayor seguridad en la realización de las actividades propias de campaña, así como en caso de resultar electas, tendrán una mayor protección al inhibir los ataques personales por motivos de género.

Además, permitirá proteger que quienes ocupen cargos públicos sean personas no violentas -al menos no sentenciadas por ello- ni deudoras de alimentos, es decir que cuentan con compromiso en estos temas que van dirigidos a proteger a sectores de la población altamente vulnerados, como son las mujeres y niñas, niños y adolescentes, a buscar su mejor desarrollo tanto en lo económico, político y social, y por ende a proteger su dignidad humana; pretende enviar a la sociedad un mensaje de cero tolerancia a la violencia y de ética en el servicio público, buscando asegurar la idoneidad y elegibilidad de las y los servidores públicos, cambiando los estándares en la responsabilidad pública e institucional. Esta norma permitirá

dignificar la política y el ejercicio público; es decir, implica un cambio de conciencia pública, política y social.

Los partidos políticos tendrán una gran responsabilidad de garantizar que sus personas candidatas sean íntegras, que no se encuentren bajo los supuestos que marca la nueva norma constitucional, esto no solo por las consecuencias que podría traer una postulación de quien no debe ser postulado o postulada, sino por responsabilidad moral y pública, de que quienes ocupen cargos públicos sean garantes de la dignidad de sus gobernados, comprometidas con la progresividad de los derechos humanos de la niñez y de las mujeres. Responsabilidad que se ve maximizada, cuando el 62% de las personas estima que los partidos políticos en México no funcionan bien y el 58%, considera que no son indispensables para la democracia (Latinobarómetro 2023: 47-48).

Por tanto, los partidos políticos tendrán la responsabilidad de reformar sus estatutos y demás documentos básicos a fin de adecuarlos a esta nueva norma constitucional, así como establecer los procedimientos necesarios a fin de que sus candidatas y candidatos no se encuentren bajo estos nuevos supuestos de suspensión.

Esperemos que con esta nueva norma constitucional se cuente con personas servidoras públicas con una mayor calidad y responsabilidad humana, que permita a la población tener una mayor confianza en las instituciones y quienes las integran.

¿Cómo se verá reflejado en el ejercicio de derechos?

La principal consecuencia al actualizarse el supuesto planteado en la ley será la suspensión de derechos o prerrogativas como ciudadanas y ciudadanos, esto es, quienes se encuentren sentenciados por violencia o por ser deudora o deudor moroso alimentario no podrán ocupar **ningún** cargo público, ya sea por elección popular o por designación o contratación, ya que las autoridades responsables deberán verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la constitución. Es decir, su derecho a ocupar un cargo público se verá suspendido hasta en tanto no se cumplan las condiciones que en su momento prevea la ley para su rehabilitación.

¿Cuáles serán las dificultades para su implementación desde los órganos electorales en los diversos contextos que conviven en nuestro país y al interior de cada estado?

Se estima que éste será en un primer momento, el tema más complejo para hacer efectivo lo previsto en la constitución, ello toda vez que existen muchas interrogantes en el aire tales como: ¿Cómo se va revisar el efectivo cumplimiento de la norma? ¿El INE y los OPLE cuentan con la estructura y presupuesto idóneo para la revisión de la totalidad de candidaturas? ¿Cuál será el mecanismo para que los partidos revisen y efectúen un filtro previo, el INE y/o los organismos públicos locales electorales (OPLE) establecerán una pauta? ¿Cómo garantizar el suministro oportuno de la información por parte de los poderes judiciales federal y local, fiscalías, sistemas nacional y estatales DIF y dependencias en materia de registro civil o en su caso las que determine la ley local respectiva en aquellas entidades federativas que al momento regulan un registro estatal en materia de personas deudoras alimentarias?

Ante la falta de reglamentación general y de posibilidad de implementar en el proceso electoral 2023-2024 las normas que se reformen, ello toda vez que se establecen 180 días naturales para ajustar constituciones y legislación necesaria, lo cual se cumple el 25 de noviembre y el proceso electoral federal inició en septiembre -es decir no se está dentro del plazo de 90 días previos al inicio del proceso, previsto en la propia constitución para la promulgación y publicación de leyes electorales federales y locales- el INE y los OPLE deberán emitir las reglas y procedimientos necesarios para que, dentro de las posibilidades operativas de tiempo y atribuciones, se busque dar cumplimiento efectivo a la norma constitucional.

Asimismo, es de resaltar que para la generación del Registro Nacional de Obligaciones alimentarias, el Sistema Nacional DIF tiene 300 días -03 de marzo de 2024-, y que acorde a los lineamientos que expida, los Congresos Locales y los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México deberán ajustar su marco normativo, así que, la tarea más ardua será el suministrar el registro de la información sobre las personas

deudoras alimentarias, ello ante la gran carga de trabajo que tienen los tribunales, a la cual se suma esta tarea.

Así, toda vez que las legislaciones ya no estarán listas para este proceso electoral, y más tomando la previsión de que no puede haber modificaciones sustantivas 90 días antes del inicio del PE, el reto mayúsculo para el INE y los OPLE será ver cómo se verificará el cumplimiento de estos requisitos, establecer un procedimiento para ello y verificar el cómo los partidos políticos deberán presentar información que les permita reducir su carga.⁴

En tanto, respecto al requisito de no haber sido sentenciado por violencia, falta también el medio o los medios para el suministro de esa información, siendo éste el principal reto a superar, ya que a diferencia de las personas deudoras alimentarias, para este elemento, el legislativo no ha previsto un registro, salvo los existentes en materia de violencia política. Asimismo, la diferencia entre sentencia firme en los casos de violencia y declaratoria en el caso de personas deudoras alimentarias generara una mayor complicación en éste último caso, ya que el estado de deudora puede cambiar en cualquier momento al realizar el pago de sus obligaciones, haciendo la diferencia en la ciudadanía entre contar o no con sus derechos o prerrogativas.

Por lo cual, deberán establecerse acuerdos de coordinación y colaboración con tribunales administrativos, judiciales y electorales, con el registro civil y con fiscalías, para el suministrar de la información sobre las personas candidatas deudoras alimentarias, así como, de las sentenciadas por cometer intencionalmente delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, resultando indispensable el compromiso de dichos órganos a fin de

⁴ En el proceso electoral concurrente 2023-2024, se elegirán 35,702 cargos de elección popular: Presidencia de la República, 9 gubernaturas, congreso federal, 31 congresos locales, ayuntamientos y 16 alcaldías. Además de la renovación de todas las secretarías de estado.

obtener en tiempo y forma la información. Aquí el reto mayor será para dichos entes externos, toda vez que deberán entregar la información en tiempos sumamente cortos.⁵

Además, no debemos dejar de lado, que pudiese existir una pluralidad de normas locales en estas materias, en particular en el tema de registro de personas deudoras alimentarias, mediante las cuales cada estado puede llegar a presentar rutas y complejidades distintas, como es el caso de Chihuahua, cuya Ley Electoral del Estado señala -previamente a la reforma constitucional- como requisito de elegibilidad el de *“no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género; incumplido con la obligación alimentaria o con acuerdo o convenio derivado de un*

⁵ Conforme a la LEGIPE, los plazos para el registro de candidaturas ante el INE y el procedimiento para determinar sobre este serían:
Artículo 237.

1. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes:

- a) En el año de la elección en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, los candidatos serán registrados entre el 15 al 22 de febrero, por los siguientes órganos...
- b) En el año de la elección en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, los candidatos por ambos principios serán registrados entre el 22 al 29 de marzo...

Artículo 239.

1. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el presidente o secretario del consejo que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo anterior.

2. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 237 de esta Ley.

3. Para el caso de que los partidos políticos excedan el número de candidaturas simultáneas señaladas en el artículo 11, párrafos 2 y 3, de esta Ley, el Secretario del Consejo General, una vez detectadas las mismas, requerirá al partido político a efecto de que informe a la autoridad electoral, en un término de cuarenta y ocho horas, las candidaturas o las fórmulas que deban excluirse de sus listas; en caso contrario, el Instituto procederá a suprimir de las respectivas listas las fórmulas necesarias hasta ajustar el límite de candidaturas permitidas por la ley, iniciando con los registros simultáneos ubicados en los últimos lugares de cada una de las listas, una después de otra, en su orden, hasta ajustar el número antes referido.

4. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se refiere el artículo 237 de esta Ley será desechada de plano y, en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos.

5. Dentro de los tres días siguientes en que venzan los plazos a que se refiere el artículo 239, los Consejos General, locales y distritales celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan.

6. Los consejos locales y distritales comunicarán de inmediato al Consejo General el acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan realizado durante la sesión a que se refiere el párrafo anterior.

7. De igual manera, el Consejo General comunicará de inmediato a los consejos locales y distritales, las determinaciones que haya tomado sobre el registro de las listas de candidatos por el principio de representación proporcional.

mecanismo alternativo para la solución de controversias”,⁶ para esto último se previó un Registro Estatal de Deudores Alimentarios, cuyo registro actualmente se encuentra a cargo de la Dirección del Registro Civil a través de un Padrón de Deudores Alimentarios Morosos.⁷

Asimismo, es de suma importancia determinar si la norma tiene efectos retroactivos, es decir si aplica a las personas que se encuentran en estos supuestos desde antes de la reforma o solo a partir de la reforma. Así que, en caso de efectos retroactivos, el reto aún más grande será la revisión de estos nuevos requisitos constitucionales en las y los funcionarios públicos en funciones, ello, debido a la cantidad de estos.

Otro de los retos será el socializar la reforma con personas interesadas en ocupar una candidatura, con partidos políticos y con la población en general; el dar a conocer su contenido y alcances para que se pueda exigir su cumplimiento, fomentar una cultura de denuncia y que con ello, pueda contribuir a la revisión de aquellas personas candidatas que presuntamente se encuentren en una de las causales de suspensión de derechos o prerrogativas antes señaladas. Sin embargo en un país donde más del 93.2% de los delitos no se denuncian (ENVIPE, 2022), debido a que las víctimas, entre otras razones, piensan que es una pérdida de tiempo y desconfían en las autoridades, el tema se vuelve cada vez más complejo, por lo que corresponderá a éstas buscar la confianza de la población y generar la cultura de la denuncia, mediante una comunicación eficiente.

Finalmente, resulta imperante considerar los efectos electorales, políticos y sociales que puedan generarse con cada caso que se presente de alguna candidatura que se registre, boleta que se imprima, elección que se gane o cargo que se ocupe por una persona que encuentre en el supuesto de suspensión de derechos y que el entramado institucional no haya logrado

⁶ Artículo 8

1) Son elegibles para los cargos de Gobernadora o Gobernador, diputadas o diputados e integrantes de ayuntamientos, las ciudadanas o ciudadanos que además de los requisitos establecidos en la Constitución Federal, la particular del Estado, así como en otras Leyes aplicables, reúnan los siguientes:

e) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género; incumplido con la obligación alimentaria o con acuerdo o convenio derivado de un mecanismo alternativo para la solución de controversias.

⁷ Este registro se regula a través de la Ley del Registro Estatal de Personas Alimentarias Morosas de Chihuahua y se puede consultar en: <http://rc.chihuahua.gob.mx/deudores/>.

advertir a tiempo o, en su caso, que de forma posterior a la revisión de requisitos, se colocó en el supuesto normativo. Sabemos que el Instituto Nacional Electoral actualmente se encuentra trabajando en los lineamientos correspondientes a fin de dar aplicabilidad a la norma constitucional, los cuales servirán de directriz para el tratamiento que se dé para la aplicación de la nueva norma constitucional.

Conclusión

La nueva causal de suspensión de derechos o prerrogativas prevista en el artículo 38, fracción VII, de nuestra Carta Magna sin duda es un gran logro y avance en la generación de una sociedad más justa, que viene a reforzar el significado de la democracia como sistema de vida, y que sin duda permitirá personas servidoras públicas con una mayor calidad e integridad humana, que busquen la protección de estos ámbitos más vulnerables hacia los grupos históricamente desprotegidos, hacia las mujeres y la niñez que son parte del núcleo familiar, de vivir en sociedad.

Efectivamente, su implementación no será sencilla y conlleva varios retos y esfuerzos considerables para las autoridades involucradas, entre ellos, para el caso de las autoridades electorales, la revisión previa de los requisitos constitucionales para otorgamiento del registro de candidatura, y el prever las consecuencias cuando alguna candidatura ya registrada caiga en los supuestos normativos, ya sea previo a la jornada electoral, o una vez electa para el cargo, sin embargo, con el tiempo sin duda esta reforma permitirá evolucionar en el pensamiento y actuación en temas de gran importancia social como lo es la violencia y las obligaciones alimentarias. En hora buena por este logro parlamentario.

Fuentes de información

CEDAW. Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. 1979. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

CNDH. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primera vez que la mujer vota en México. Disponible en: <https://www.cndh.org.mx/noticia/primera-vez-que-la-mujer-vota-en-mexico>

DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros.

Dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión para la Igualdad de Género, a la Minuta con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. 2023. Disponible en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-04-28-1/assets/documentos/Dict_Com_Puntos_Const_Art_38_Suspencion_Derechos.pdf

ENVIPE. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública. 2022. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf.

INE. Instituto Nacional Electoral. Foro 3 de 3 contraq la violencia en el marco de la reforma constitucional. 2023. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rRgDd4sQitA>.

INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. *Violencia contra las Mujeres en México*. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/>.

Latinobarómetro. *Informe 2023*. Santiago de Chile. Corporación Latinobarómetro. Disponible en: <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>.

LEGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2014. Congreso de la Unión.

LEECH. Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 2015. Congreso del Estado de Chihuahua.

PDAM. Padrón de Deudores Alimentarios Morosos. Dirección General del Registro Civil de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua. Disponible en: <http://rc.chihuahua.gob.mx/deudores/>.

SIJUFOR. Servicios Integrales Jurídico-Forenses. La historia de los derechos de la mujer en México. 2022. Disponible en: <https://www.sijufor.org/informacioacuten-relevante-en-materia-juriacutedica/la-historia-de-los-derechos-de-la-mujer-en-mexico>